

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO: 682
RADICACIÓN: 11001-33-35-027-2023-00289-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: CARLOS HERNÁN GUZMÁN BELTRÁN
DEMANDADAS: LA NACIÓN-MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO, SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
CONVENIO ANDRÉS BELLO y ORGANIZACIÓN DE
ESTADOS IBEROAMERICANOS
ASUNTO: Acepta impedimento y avoca conocimiento

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

El señor Carlos Hernán Guzmán Beltrán, por conducto de apoderado especial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra La Nación-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés Bello y la Organización de Estados Iberoamericanos, para que se declare la existencia de un contrato realidad y se le reconozcan y paguen las acreencias laborales derivadas de la ejecución de varios contratos de prestación de servicios en el periodo comprendido entre el 1° de abril de 1999 y el 1° de agosto de 2011, para lo cual solicitó la nulidad del Oficio No. 8320-E2- 25709-C1 del 10 de octubre de 2014.

El Juez Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante auto del 11 de julio de 2023, se declaró impedido para conocer del presente proceso, aduciendo que está inmerso en la causal de recusación prevista en el numeral 1° del artículo 130 del CPACA, toda vez que su cónyuge participó en la expedición de uno de los actos administrativos acusados, y por tal razón le corresponde a este despacho determinar si es fundado o no, de conformidad con lo dispuesto artículo 131 del CPACA.

La jurisprudencia constitucional ha reiterado que la imparcialidad de los jueces y magistrados es garantía para las partes de una decisión justa. Veamos:

“La convivencia pacífica y el orden justo, consagrados en la Constitución como principios que rigen la relación entre las personas y el ordenamiento constitucional colombiano, reposan sobre la institución del tercero imparcial. Ante éste deben acudir las personas cuando no les ha sido posible resolver un conflicto por medio del entendimiento directo entre las partes, a fin de que sea el juez, con audiencia y participación de los interesados, quien diga cuáles son las normas aplicables al caso, qué hechos debidamente establecidos han de ser valorados para resolver el asunto, y cuál es, en últimas, la solución adecuada a derecho. La actuación parcializada de este funcionario daría al traste con cualquier posibilidad de lograr una decisión justa, y convertiría al Estado de Derecho en una burla cruel para quienes se acercaran a los estrados judiciales en procura de cumplida justicia”.

También ha indicado que el principio de imparcialidad que guía la actividad del juez debe ser estudiado desde su doble dimensión:

“(i) subjetiva, esto es, relacionada con ‘la probidad y la independencia del juez, de manera que éste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto’; y (ii) una dimensión objetiva, ‘esto es, sin contacto anterior con el thema decidendi, de modo que se ofrezcan las garantías suficientes, desde un punto de vista funcional y orgánico, para excluir cualquier duda razonable al respecto”.

En la sentencia T-657/98, la Corte Constitucional estableció que existe una serie de situaciones en las que el juez debe declararse impedido para decidir, las cuales se contraen a las causales objetivas y subjetivas definidas en la ley procesal, y advirtió que el “*interés directo o indirecto*” hace parte de las segundas y, por lo tanto, su configuración en determinado caso, depende ampliamente de la discrecionalidad del fallador.

“Las causales objetivas obligan, aunque el juez incurso en ellas internamente considere que su juicio no va a ser influido por los factores considerados en la ley; por tanto, una vez la situación es conocida, el afectado debe manifestarla para que se proceda a separarlo del conocimiento como está previsto en las normas, y el proceso no sufra retrasos ni se afecten las garantías de los artículos 28, 29, 228, 229 y 230 de la Carta Política.

Las causales subjetivas, obligan al juez a considerar la situación prevista en la ley una vez conocida su existencia respecto a uno o más de los otros participantes en el proceso, y a decidir si considera justificado hacer expresa manifestación de estar afectado por una de estas causales, para que el competente juzgue si procede separarlo del conocimiento; si decide no hacer la manifestación antedicha y es recusado, ‘la apreciación tanto del ‘interés directo o indirecto’ en el proceso como de la ‘enemistad grave o amistad íntima’ es un fenómeno que depende del criterio subjetivo del fallador. Obsérvese que incluso las causales vienen acompañadas de adjetivos calificativos, lo cual pone de manifiesto la discrecionalidad en su apreciación”.

Las causales de impedimento de los jueces administrativos están contempladas en el artículo 141 del CGP y de manera especial en el artículo 130 del CPACA, en cuya parte pertinente prevé:

“Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:

1. Quando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, hubieren participado en la expedición del acto enjuiciado, en la formación o celebración del contrato o en la ejecución del hecho u operación administrativa materia de la controversia”.

En efecto, se observa en el registro civil de matrimonio con número serial 04543785 que el Dr. Andrés José Quintero Gnecco, Juez Veintiséis Administrativo de Bogotá, contrajo nupcias con la señora Johana Asslen Arévalo Camacho el 10 de noviembre de 2011, y en el escrito de demanda se deprecia la siguiente pretensión:

5. Que se declare la nulidad del Oficio 8320-E2-25709-C1 de fecha 10 de octubre de 2014, emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Al revisar la copia del aludido acto administrativo acusado, obrante en los folios 194 y 195 del archivo “001EXPEDIENTE.pdf” del expediente digital, se constata que fue la esposa del Juez Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá quien lo emitió, en calidad de Coordinadora del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Obsérvese:

"AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA: Por tratarse de un contrato de prestación de servicios profesionales, regido por la Ley 80 de 1993, el literal h del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 2474 de 2008, el contratista actuará con total autonomía técnica y plena independencia, por lo cual no contrae ningún vínculo de carácter laboral con el FONAM. El presente contrato en ningún caso causará el pago de prestaciones sociales y demás inherentes a la previsión social a favor del contratista".

Cordialmente,

Johana Asslen Arevalo C.
JOHANA ASSLEN AREVALO CAMACHO
Coordinadora Grupo de Talento Humano

Así las cosas, es plausible concluir que el impedimento objeto de estudio se encuentra debidamente sustentado, pues el hecho en que se fundamenta se enmarca dentro del supuesto fáctico que prevé el numeral 1° del artículo 130 del CPACA y, por lo tanto, debe ser aceptado.

Ahora bien, el artículo 131 del CPACA dispone:

"Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

*"1 El juez administrativo en quien concurra alguna de las causales de que trata el artículo anterior deberá declararse impedido cuando advierta su existencia, expresando los hechos en que se fundamenta, en escrito dirigido al juez que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundado y, **de aceptarla, asumirá el conocimiento del asunto**; si no, lo devolverá para que aquel continúe con el trámite. Si se trata de juez único, ordenará remitir el expediente al correspondiente tribunal para que decida si el impedimento es fundado, caso en el cual designará el juez ad hoc que lo reemplace. En caso contrario, devolverá el expediente para que el mismo juez continúe con el asunto".*

Por consiguiente, teniendo en cuenta que este estrado judicial estima que el impedimento declarado es fundado, se avocará el conocimiento del presente asunto, y en auto separado se pronunciará sobre el trámite subsiguiente que corresponda surtir de acuerdo con el estado en el que se encuentra la actuación procesal.

En mérito de lo expuesto, se dispone:

1. ACEPTAR el impedimento expresado por el Dr. Andrés José Quintero Gnecco, Juez Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá.
2. AVOCAR el conocimiento del presente proceso.
3. COMUNICAR esta decisión al Juez Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, a esta última para efectos de la compensación a que haya lugar en la asignación de procesos.

NOTIFÍQUESE

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

KPG

Firmado Por:

Humberto Lopez Narvaez
Juez
Juzgado Administrativo
027
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5571a4313df67f73533965da358d801692a40d3f25dcd282728ccaa477a61f74**

Documento generado en 21/09/2023 08:56:31 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>